



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 8

18685/2024 UNION DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS c/ EN
-DTO 953/24 s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, de agosto de 2025.- MB

Y VISTOS:

Para sentencia los autos del epígrafe, y

CONSIDERANDO:

1.-La accionante, en representación de los derechos de incidencia colectiva de todos los trabajadores, empleados públicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos afectados en su derecho constitucional a la estabilidad del empleo público, en la protección contra el despido arbitrario, en el principio de progresividad, de igualdad y no discriminación para acceder a los empleos sin otra condición que la idoneidad y el derecho de propiedad, promueve acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional a fin de obtener una sentencia que ordene retrotraer la situación de hecho al estado anterior al dictado del Decreto DECTO -2024-953- APN-PTE y del ART. 2 DE LA LEY 27.742, en tanto que su aplicación genera o generará graves, irreparables y actuales perjuicios al Estado Nacional, y a los trabajadores del Organismo Fiscal -según expresa-.

Subsidiariamente, considerando que la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos se basa en las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley n° 27.742, solicita se declare la inconstitucionalidad del decreto mencionado y del art.2° de la Ley 27.742.

Señala que si bien la Ley N° 27.742 faculta al PEN a disponer, en relación con los órganos u organismos de la



administración central o descentralizada contemplados en el inciso c) del artículo 8° de la ley 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente su reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; esa facultad no lo habilita a ejercer sus atribuciones disolviendo la AFIP, debido a que tal decisión afecta aspectos críticos del federalismo fiscal y del sistema de recaudación tributaria, funciones que están protegidas constitucionalmente y requieren intervención del Congreso.

Manifiesta que dicha acción vulnera derechos adquiridos de los trabajadores fiscales al desconocer los convenios colectivos de trabajo vigentes, los cuales brindan estabilidad, y procedimientos específicos frente a la causal de desvinculación, privándolos de beneficios que forman parte de su patrimonio laboral y contraviniendo el derecho de inviolabilidad de la propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Argentina.

Sostiene, asimismo, que la disolución de la AFIP podría facilitar la evasión fiscal y la malversación de fondos públicos, por entender que su desarticulación, sin una estructura sólida que la reemplace, puede abrir oportunidades para prácticas fraudulentas, ya que una nueva agencia sin la misma reputación y estructura podría carecer de los controles necesarios para prevenir irregularidades.

Refiere que las normas impugnadas resultan inconstitucionales e incompatibles con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que reconocen la vigencia plena del derecho al trabajo, a la protección contra el despido arbitrario, a la estabilidad en el empleo y a la progresividad de los derechos; a fin de que sean exigibles y plenamente operativos por sus titulares, no meramente sujetos a la discrecionalidad y arbitrariedad del empleador, en este caso el Estado.

Señala que el Decreto 953/2004 resulta inconstitucional por vulnerar las previsiones contenidas en el art. 76 de la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 8

Constitución Nacional, al exceder el uso de facultades legislativas delegadas por el HCDN en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, debido a que la Administración Federal de Ingresos Públicos constituye un ente público excluido expresamente de la Administración Nacional (art. 8 inciso c) de la Ley N.º 24.156).

Posteriormente, alega como hecho nuevo el dictado de la Disposición ARCA 36/2025, que modifica la estructura de la DGI.

Funda su pretensión en derecho y efectúa reserva del caso federal.

2.- Requerido el informe previsto por el art. 8º de la ley 16.986, la accionada ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA, por letrada apoderada, lo responde con fecha 11 de junio de 2025 y solicita el rechazo del presente amparo por los argumentos que allí desarrolla en extenso.

En primer término, manifiesta que el Decreto N° 953/2024 fue dictado en ejercicio de atribuciones que le confiere expresamente la Constitución Nacional (art. 99 inc. 1 CN), y por el artículo 3º, inciso b) de la Ley N.º 27.742, en un marco de severa crisis económica.

Señala que su artículo 6º dispone que la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) es la continuadora jurídica, de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), y mantiene las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a ésta última, relativas a la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos y recursos de la seguridad social.

Sostiene que se trata de un decreto delegado, que consiste en un instrumento legal que permite al Poder Ejecutivo tomar decisiones en áreas donde el Congreso de la Nación ha delegado sus facultades. En el caso, la Ley de Bases habilitó al Poder Ejecutivo a modificar la estructura de la recaudación y control fiscal, y el Decreto 953/24 es la materialización de esa delegación.



Opone excepción de falta de legitimación activa de la accionante por considerar que no titulariza un interés concreto y personal que se encuentre afectado por la supuesta existencia de un “acto estatal arbitrario”.

Explica que se trata de una entidad sindical simplemente inscripta, que agrupa únicamente a los trabajadores de grupos profesionales y jerárquicos que prestan servicios en relación de dependencia en la Dirección General Impositiva de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero; y no respecto de la totalidad de los trabajadores de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos -como señala en su escrito de inicio-.

Asimismo, destaca que la acción promovida se basa en afirmaciones meramente abstractas acerca de supuestas afectaciones de diversos derechos sobre los que extensamente teoriza en la demanda.

Agrega que no existe “caso” en autos, debido a que la accionante no logra demostrar con sus meras manifestaciones cuál es el interés personal que ha sido afectado, por ausencia de una controversia actual y concreta entre las partes, como así también por la falta de justificación de un interés específico, directo, o inmediato atribuible a la aquí actora.

Más adelante objeta la procedencia de la vía.

Considera que no se encuentran cumplidos los recaudos procesales que hacen a su admisibilidad, en tanto las afectaciones a los principios constitucionales en los que la actora sustenta su pretensión no surgen en forma manifiesta, y además se basan en escenarios hipotéticos y conjeturales, sin acreditar los daños que invoca, y sin siquiera ofrecer prueba a los fines de acreditar las cuestiones alegadas.

Entiende, también, que la presente acción excede el marco cognoscitivo del amparo y requiere, en todo caso, la producción de mayor debate y prueba, en el marco de un proceso de conocimiento adecuado; en el cual, corresponde analizar no sólo la validez del Decreto N° 953/24, sino también, en forma simultánea, la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 8

de la Disposición ARCA 36/2025, en relación a la Ley 27742, dictados siguiéndose el procedimiento establecido por la CN, conforme sus artículos 76 y 99.

Ofrece prueba y plantea reserva del caso federal.

3.- Conferido el traslado del informe producido, la accionante lo contesta con fecha 27 de junio de 2025 y ratifica todos los hechos expuestos en la demanda, la procedencia del amparo y los derechos y garantías que entiende conculcados por la normativa que aquí se cuestiona.

4.-Con fecha 14 de julio de 2025 el señor Fiscal Federal emite dictamen en los términos del artículo 39, segundo párrafo, de la ley 24.946 y propicia el rechazo de la acción de amparo.

5.-Pasan los autos a Sentencia y,

CONSIDERANDO:

I.- En primer término, corresponde analizar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el Estado Nacional.

La Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos promueve la presente acción en defensa de los derechos de los trabajadores vinculados al organismo y del propio Estado Nacional. Asimismo, de la lectura del escrito de inicio surge que también actuaría por la afectación de derechos de la propia asociación sindical -que no especifica-.

De las constancias de autos y del exhaustivo análisis efectuado por el Sr. Fiscal Federal, surge que: *la personería gremial de la accionante surge de la Resolución N° 839/2015, cuyo art. 1° determina que “...agrupa a los trabajadores de grupos profesionales y jerárquicos que presten servicios en relación dependiente en la Administración Federal de Ingresos Públicos, con exclusión de la Dirección General de Aduanas. En ese sentido, tomado el escalafón existente en la actualidad, el presente Sindicato agrupará al personal de grupo 17 a 26 ambos inclusive”, * la cuestión en ciernes se vincula con desvinculaciones y cambios de condiciones laborales,



que no solamente no han ocurrido, sino que de haberlo hecho, resultarían situaciones que podrían revestir particularidades diferenciadas entre unos y otros, * la actora carece de absoluta legitimidad para investirse en representante de los intereses de la propia Nación Argentina, *la totalidad de los agravios esbozados se estructuran en un marco futuro e hipotético, no habiendo acreditado agravio concreto alguno.

Por ello, compartiendo los sólidos argumentos vertidos por el Sr. Fiscal Federal -a los cuales me remito en honor a la brevedad-, corresponde admitir la excepción de falta de legitimación procesal activa de la accionante.

II. Si bien lo dicho basta para desestimar la acción interpuesta, cabe agregar -siguiendo lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal- que *“...corresponde el rechazo de la acción, cuando las circunstancias comprobadas en la causa evidencian que no aparece nítida una lesión cierta o ineludible causada con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta o el asunto versa sobre una materia opinable que exige una mayor amplitud de debate o de prueba (Fallos: 335:2644; 335:2195; 331:1403...)”*

Por todo lo expuesto,

FALLO:

1) Haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación procesal del accionante e inexistencia de caso opuesto por la accionada.

En consecuencia, se rechaza la acción de amparo interpuesta, por Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

2) La solución aquí arribada no importa de manera alguna un pronunciamiento acerca de la validez constitucional de la norma aquí impugnada sino solamente sobre la ausencia de caso como recaudo indispensable para el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 8

3) Costas por su orden de conformidad con lo dispuesto por el art. 17, ley 16986 y art. 68, -segundo párrafo- del CPCCN), dado el fundamento por el cual se rechaza la acción.

Regístrese, notifíquese con copia del dictamen fiscal y oportunamente archívese.

